

FM
3509

FM-3509

REGLAMENTO DE CONCILIACION Y ARBITRAJE

Cámara de Comercio
e Industria de Madrid

Ayuntamiento de Madrid



Folleto.

FM-3509

INDICE

Reglamento
de Conciliación
y Arbitraje

R/90.998



REGLAMENTO
DE CONCILIACION
Y ARBITRAJE

R/90.998



INDICE

Páginas

— Presentación ...	5
— Reglamento de Conciliación y Arbitraje ...	7
— Conciliación ...	7
— Arbitraje ...	8
— Cláusula tipo de Arbitraje ...	12
— Gastos y Costas por las Conciliaciones y Arbitrajes ...	13
— Arbitrajes de Derecho Privado (Ley 22 de diciembre de 1953) ...	15

PRESENTACION

La institución del arbitraje encuentra su justificación, fundamentalmente, en el hecho de que las partes que se someten a este procedimiento, aprecian en él razones de orden práctico para sus intereses; estas razones, o ventajas, vienen constituidas, por un lado, por la mayor sencillez en cuanto al formalismo y menor solemnidad en cuanto al procedimiento a seguir en la dilucidación y resolución del asunto sometido al árbitro, lo que implica, a su vez, un inferior costo, y de otro, por la suficiente garantía de eficacia en cuanto a la ejecución de la resolución o laudo arbitral, que viene asegurada por el reconocimiento legal que a los arbitrajes confiere su ley reguladora de 22 de diciembre de 1953; dándose, además, en esta institución la circunstancia de que el árbitro resuelve las cuestiones que se le plantean, con justicia y en equidad, con base en su especial conocimiento práctico de las peculiares circunstancias que afectan o inciden en el tráfico mercantil.

Debe dejarse aquí constancia de que la Cámara de Comercio e Industria de Madrid siempre ha tenido un gran interés en ofrecer a sus electores cuantos servicios, dentro de las funciones que le son propias, puedan constituir una aportación para coadyuvar a la buena marcha y desenvolvimiento de sus actividades, y, en este sentido, puede afirmarse que no han sido pocas las ocasiones en que, a iniciativa de los propios comerciantes e industriales, la Cámara se ha visto en la precisión de realizar funciones arbitrales para dirimir las diferencias en cuestiones mercantiles que a ella se le han sometido.

Por esta razón, la Cámara ha considerado conveniente fijar el procedimiento e institucionalizar los órganos mediante los cuales se habrá de realizar, en el futuro, el arbitraje corporativo de una manera uniforme y siguiendo un proceso que pueda ser conocido, por anticipado, por quienes se sometan a sus decisiones.

Para ello el Pleno de la Cámara ha aprobado un Reglamento de Conciliación y Arbitraje, que se hace público al objeto de divulgar, entre los potenciales interesados, las posibilidades que, en este aspecto, les brinda la Cámara de Comercio e Industria de Madrid.

Como puede apreciarse, se distinguen perfectamente dos formas de actuación de la Cámara, constituidas, de un lado, por un intento de Conciliación, y de otro, por una actuación arbitral, reducida al mínimo en cuanto a sus formalidades, pero que garantiza las posibilidades de defensa de ambas partes y el esclarecimiento y prueba de cada cuestión debatida.

Se incluye también el texto íntegro de la Ley de 22 de diciembre de 1953 sobre arbitrajes de derecho privado, que constituye la norma de aplicación subsidiaria, respecto de cuanto no esté previsto en el Reglamento de Conciliación y Arbitraje de la Cámara.

Madrid, abril de 1984.

**REGLAMENTO DE CONCILIACION
Y DE ARBITRAJE
DE LA CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA
DE MADRID**

Artículo 1.º—Este Reglamento será de aplicación a la conciliación y al arbitraje de equidad que sobre cuestiones mercantiles sean sometidas a la Cámara y ello en virtud de la facultad que le está conferida a este respecto por el artículo 3.b) del Reglamento General de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación de España, aprobado por Decreto 1.291/1974, de 2 de mayo, y modificado por el Real Decreto 753/1978, de 27 de marzo.

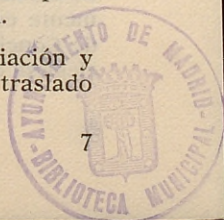
Artículo 2.º—En el seno de la Cámara existirá una Comisión de Conciliación y Arbitraje, formada por un mínimo de cinco miembros, que serán elegidos por períodos de cuatro años, con posibilidad de reelección, por el Pleno de la Cámara de Comercio e Industria de Madrid, entre los Vocales del mismo, procurando que al menos un tercio de ellos sean Letrados.

La Comisión contará con un Presidente y un Vicepresidente y actuará de Secretario, el Secretario de la Cámara o persona que él designe de entre los funcionarios de la misma.

CONCILIACION

Artículo 3.º—La parte que desee la conciliación deberá solicitarlo a la Comisión de Conciliación y Arbitraje por escrito, haciendo constar nombres, domicilio de las partes, exposición de la pretensión y cualquier prueba o documento que considere conveniente. Igualmente aportará la cantidad establecida en el oportuno baremo a título de provisión de fondos para los gastos del procedimiento de conciliación.

Artículo 4.º—Recibida la petición de conciliación y dentro del plazo de siete días, la Cámara dará traslado



de la misma a las partes y señalará sitio, día y hora para que tenga lugar la conciliación, mediando entre citación y comparecencia cuatro días naturales como mínimo e invitando igualmente a la otra parte a someter, si lo desea, sus alegaciones por escrito.

Artículo 5.º—La Comisión nombrará para cada caso a uno o tres de sus miembros, dependiendo de las características del asunto en litigio.

Artículo 6.º—De no comparecer las partes en el lugar, fecha y hora señalados para la conciliación, se dará ésta por intentada sin efecto.

Artículo 7.º—Si comparecen las partes, el o los miembros designados de la Comisión intentarán la conciliación, informando y razonando sobre las alegaciones que se formulen y proponiendo fórmulas transaccionales de las cuestiones controvertidas. Se levantará acta del resultado de la conciliación.

Artículo 8.º—Los acuerdos transaccionales que resulten de la conciliación se reflejarán en documento privado que firmarán ambas partes y tendrán la fuerza de obligar que resulte de lo establecido en el artículo 1.278 del Código Civil.

ARBITRAJE

Artículo 9.º—La parte que desee recurrir al arbitraje de la Cámara, formulará por escrito dirigido a la Secretaría de la C. C. A., solicitud de arbitraje haciendo constar nombres y domicilio de las partes y una exposición de sus pretensiones, así como de los convenios existentes y muy especialmente, si existiese, del contrato de arbitraje. Igualmente deberá acompañar la cantidad establecida en el oportuno baremo a título de previsión de fondos para los gastos del procedimiento de arbitraje.

Artículo 10.—Recibida la petición de arbitraje, la Secretaría de la Comisión de Conciliación y Arbitraje, la notificará a la otra parte y convocará a ambas a una reunión, indicando lugar, fecha y hora, mediando entre citación y comparecencia setenta y dos horas, como mínimo. En dicha reunión las partes deberán, de común acuerdo, designar el o los árbitros en número de uno o tres, debiendo recaer necesariamente esta designación en miembros de la Comisión de Conciliación y Arbitraje de la Cámara. En caso de elegirse en número de tres, uno de ellos deberá reunir

además la condición de Letrado y será el que actúe como Presidente del Tribunal de Arbitraje.

No obstante lo indicado en el párrafo anterior, las partes de común acuerdo, podrán excepcionalmente designar dos árbitros que no sean miembros de la Comisión de Conciliación y Arbitraje de la Cámara debiendo entonces recaer necesariamente el nombramiento del tercer árbitro en un miembro de la citada Comisión.

Igualmente en dicha reunión se llegará a un acuerdo sobre la delimitación de la controversia y se aceptará expresamente por ambas partes la aplicación al arbitraje del presente Reglamento con todos sus efectos y consecuencias.

Artículo 11.—En el caso de no poder celebrarse la reunión por incomparecencia o no llegarse a un mutuo acuerdo sobre los árbitros y la determinación del tema controvertido, se interrumpirá el proceso de arbitraje y la parte que lo ha solicitado podrá solicitar la formalización judicial del compromiso, a tenor de los artículos 9 y 10 de la Ley de 22 de diciembre de 1953.

Artículo 12.—De alcanzarse un acuerdo, la Secretaría de la Comisión preparará la formalización del compromiso en escritura pública, en la que se recogerán: los nombres, profesión y domicilio de los árbitros elegidos de común acuerdo por las partes; la controversia que se somete al fallo arbitral; y el lugar, plazos, procedimientos y efectos del laudo que serán los establecidos en este Reglamento, cuya aceptación quedará recogida expresamente a todos los efectos, así como el hecho de que los árbitros han sido designados y aceptados por las partes que se someten al Arbitraje.

Artículo 13.—El arbitraje de la Cámara lo será siempre de equidad. No obstante y con carácter excepcional, podrá ser de derecho si ambas partes, de común acuerdo, lo solicitan, en cuyo caso la designación de los árbitros a que se hace alusión en el artículo 10 tendrá que recaer necesariamente en aquellos miembros de la Comisión de Conciliación y Arbitraje que tendrán además la condición de Letrados.

Artículo 14.—El lugar de los arbitrajes amparados por este Reglamento será siempre Madrid.

Artículo 15.—El procedimiento a que se ajustará será el siguiente:

a) Otorgada la escritura a que se hace mención en el artículo 12 y efectuada la diligencia de aceptación por parte de los árbitros ante el Notario, se considerará constituido el Tribunal arbitral.

b) El árbitro o el Presidente del Tribunal, según los casos, se dirigirá por escrito a las partes señalando un plazo máximo de veinte días para que formulen por escrito sus pretensiones y presenten los documentos en que las apoyan, así como para que propongan cualquier otro medio de prueba que consideren conveniente. Las partes, al contestar, deberán hacerlo enviando tantas copias como sean las partes interesadas.

c) Recibidas las contestaciones, el árbitro o el Presidente del Tribunal enviará una copia de los escritos presentados por cada una de las partes a las otras, concediendo un plazo de veinte días para que contesten por escrito a las alegaciones adversarias y presenten los documentos y propongan las pruebas que consideren necesarias.

d) Queda a la libre decisión del árbitro o árbitros la aceptación o no de las pruebas que han sido solicitadas, así como practicar otras que considere convenientes. Igualmente podrá, de considerarlo necesario, nombrar a uno o varios peritos, definir su misión, recibir sus informes e interrogarlos.

e) El árbitro o árbitros convocarán a las partes para oírlas personalmente. Las partes podrán comparecer en persona o por representantes debidamente acreditados y podrán estar también asistidas por asesores.

f) La no comparecencia sin causa justificada de una de las partes no tendrá consecuencia alguna y el arbitraje continuará entendiéndose que la parte renuncia a este trámite.

g) El plazo en que el árbitro o árbitros deberán dictar el laudo es de seis meses a partir de la fecha en que el árbitro o árbitros han aceptado su designación a que hace referencia el párrafo a) de este artículo 15.

h) Si las partes llegasen a un acuerdo en el transcurso del arbitraje, se dictará un laudo de acuerdo con ellas, en las que se hará constar este hecho.

i) El laudo, que en el caso de tres árbitros debe ser por mayoría de votos, se dictará por escrito ante Notario, notificándose a las partes, siempre y cuando

hayan sido abonados a la Cámara los gastos del arbitraje por las partes o por una de ellas.

j) El laudo, además de la decisión sobre el fondo fijará los gastos del arbitraje y cuál de las partes o en qué proporción se han de repartir.

Los gastos del arbitraje comprenden los honorarios del árbitro/s, los gastos del mismo/s, los honorarios y gastos de los peritos si los hubiere y los gastos normales realizados por las partes para su defensa.

Los honorarios de los árbitros se fijarán de acuerdo con la escala de honorarios anexa a este Reglamento.

Aunque sin carácter mandatorio para el árbitro que podrá decidir libremente, se establece que el gasto realizado por cada una de las partes para su defensa, sea soportado por la misma.

Artículo 16.—En el caso de arbitraje de derecho, el procedimiento a seguir será el establecido en la Ley de 22 de diciembre de 1953.

Artículo 17.—El laudo arbitral es definitivo y firme tanto en lo que se refiere a la decisión sobre el fondo de la cuestión como a los gastos, comprometiéndose las partes a ejecutarlos sin demora por el solo hecho de haber sometido su diferencia al arbitraje de la Cámara.

CLAUSULA TIPO DE ARBITRAJE

Todo litigio, discrepancia, cuestión o reclamación, resultante de la ejecución o interpretación del presente contrato o relacionados con él, directa o indirectamente, se resolverán mediante arbitraje de conformidad con el Reglamento de Conciliación y de Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de Madrid.

GASTOS Y COSTAS POR LAS CONCILIACIONES Y ARBITRAJES DE LA CAMARA

Los gastos y costas de los arbitrajes y conciliaciones de la Cámara, se distinguen en Honorarios de los Arbitrajes y Tasas Administrativas.

La Cámara, al aceptar el arbitraje, determinará su cuantía a efectos de la aplicación de los Honorarios y Tasas.

A) HONORARIOS DE LOS ARBITROS

a) Arbitrajes de equidad

Toda la actuación arbitral hasta el otorgamiento de la escritura del laudo, se ajustará a la siguiente escala:

	%
Hasta 500.000 pesetas	15
Exceso hasta 1.000.000 pesetas	12
Exceso hasta 5.000.000 pesetas	6
Exceso hasta 10.000.000 pesetas	2
Exceso sobre 10.000.0000 pesetas	1
Con mínimo de 50.000 pesetas.	

La cifra resultante del precedente cómputo será aplicable en los casos de un solo árbitro y duplicada si son tres los árbitros, que devengarán cada uno un tercio de la misma.

b) Arbitrajes de Derecho

Si el arbitraje se estableciese con tal carácter de Arbitraje de Derecho, se triplicará la anterior escala, para los Arbitrajes de Equidad.

B) HONORARIOS DE LAS CONCILIACIONES

Se aplicará la escala de los Arbitrajes de Equidad, en un 75 por 100.

C) TASA ADMINISTRATIVA

a) Arbitrajes de equidad

	%
Hasta 500.000 pesetas	4
Exceso hasta 1.000.000 pesetas	3
Exceso hasta 5.000.000 pesetas	2
Exceso hasta 10.000.000 pesetas	1
Exceso sobre 10.000.000 pesetas	0,5
Con un mínimo de 10.000 pesetas.	

b) Arbitrajes de Derecho

Se aplicará la anterior escala de la Tasa Administrativa para los Arbitrajes de Equidad aumentada en un 50 por 100.

c) Conciliaciones

Se aplicará la escala de la Tasa Administrativa de los Arbitrajes de Equidad reducida en un 75 por 100.

Los Honorarios de los Arbitros y las Tasas Administrativas que correspondan a partes que sean Electores de la Cámara gozarán de una bonificación del 25 por 100.

ARBITRAJES DE DERECHO PRIVADO

(Ley de 22 de diciembre de 1953)

Acaso ninguna institución de las que encierra el ordenamiento jurídico de un país revele, con más hondo significado, el sentido que el derecho ocupa en su vida social como la institución del arbitraje. El conjunto de normas que tienen por misión específica repartir, con criterio de justicia, los distintos bienes humanos entre los miembros de una colectividad está destinado, por la propia naturaleza de las cosas, a sufrir la ruda prueba que los conflictos de los intereses afectados le plantean diariamente. Y puesto frente a la necesidad de ordenar igualmente estos conflictos de intereses, el derecho, antes de llegar al puro mecanismo coactivo de la intervención inapelable del Poder público, idea una serie de mecanismos de conciliación que tratan de restablecer, en la medida de lo posible el interrumpido orden de la convivencia social.

Tal es precisamente el papel que asume el arbitraje dentro del sistema general de las instituciones jurídicas. Cuando ya no es posible un arreglo directo de una eventual contienda, pero quedan zonas de armonía acesibles a terceros, sin necesidad de acudir a la Fuerza del Estado, que habría que obtenerse «ex officio iudicis», una experiencia secular ha consagrado la eficacia de dar entrada, en el cuadro de las figuras jurídicas reconocidas, a esta obra pacificadora de terceros, que, gozando de la confianza de los contendientes, pueden recibir de éstos la autoridad necesaria para imponerles una decisión satisfactoria. De este modo no se desconoce ni se menosprecia la labor augusta del Juez como órgano de la soberanía del Estado, sino que precisamente, por esta excelsitud de su carácter, se la reserva para aquellos casos en que, desgraciadamente, un tratamiento amistoso no es posible ni siquiera por esta vía indirecta, y se hace necesaria la intervención del imperio estatal. El desarrollo del arbitraje es sólo, pues, un síntoma de

que en un país determinado las relaciones intersociales no se agudizan continuamente, de manera que sea siempre preciso acudir al remedio extremo de los Tribunales. De aquí que, precisamente en los países de más densa cohesión social, sin perjuicio de su refinado espíritu jurídico, el arbitraje alcance dimensiones cada vez de mayor amplitud.

El derecho vigente español no es ninguna excepción en el conjunto de sistemas jurídicos que aceptan y dan valor a la institución del arbitraje. Prescindiendo de las figuras particulares de ciertos arbitrajes, que no es ahora del caso mencionar, tanto el Código Civil (arts. 1.820 y 1.821), como la Ley de Enjuiciamiento Civil (arts. 487, 790 al 839), de venerable abolengo ya en el índice de nuestras vigencias legales, se preocupan, con el reparto de materias que pareció más conveniente al pensamiento de la época, que aquella figura por la cual los titulares de un conflicto provocan y aceptan la decisión de terceros que expresamente designan.

Ahora bien, esta aceptación de principio no consiguió en nuestra Patria, por desarrollo equivocado del planteamiento del problema, la repercusión bienhechora que teóricamente estaba llamada a producir. No sólo la dualidad de textos planteó algún problema de coordinación, sino que, sobre todo, al no haberse atrevido el legislador a proclamar explícitamente la fuerza expresa y positiva de estas convenciones, se creó una situación dificultosa dentro de la vida real. Pues el compromiso, como contrato creador de un arbitraje, determina, sí, el apartamiento de los órganos jurisdiccionales del conocimiento de un cierto litigio, pero no lleva consigo la obligación positiva, de instituirlo concretamente, ni la posibilidad de acudir al Juez para que lo haga en defecto de la parte que incumpla esta obligación. Queda así la figura del arbitraje como una especie que ni permite litigar en él, por las posibilidades abiertas a una parte de mala fe para obstaculizar su implantación, ni deja litigar fuera de él, por la excepción que permite invocar en contra de la intervención de Jueces y Tribunales.

Para remediar estos inconvenientes sólo una iniciativa era posible, la reforma de las normas vigentes en materia de arbitraje. Esto es lo que se propone la presente Ley, en la que se trata esencialmente de mejorar, obviando los inconvenientes conocidos, aquellas dificultades de que antes se hablaba.

Dos son los criterios fundamentales que se han

tenido en cuenta al proceder a su elaboración, la sencillez y la eficacia en la regulación del arbitraje. La sencillez se obtiene, además, de por la unificación de textos, que esta Ley supone con relación a la dualidad hasta hoy vigente, por la fusión de los dos tipos de arbitraje que nuestro derecho conoce: arbitraje escrito y amigable composición, dualidad innecesariamente subrayada y acentuada por la actual Ley de Enjuiciamiento Civil. A base de una figura única, que comprenda todos los arbitrajes comunes o de derecho privado; a base de una supresión radical de todas las complicaciones técnicas, muchas veces innecesarias, que aparecen en los textos hasta ahora vigentes; a base de preferir siempre un resultado modesto, pero seguro, a consecuencias más trascendentales, pero de imprevisible complicación, se estima haber trazado satisfactoriamente las líneas claras de una institución que, tal como se perfila, puede brindar a gran número de intereses patrimoniales una solución rápida y satisfactoria de los conflictos en que puedan verse envueltos.

Precisamente el que la solución sea rápida y satisfactoria es lo que se persigue implantando la segunda de las características antes señaladas, es decir: la de pretendida eficacia del arbitraje. La Ley no solamente da vigor a supuestos íntimamente ligados con el arbitraje, sobre lo que hasta ahora el derecho positivo guardaba silencio, no obstante la frecuencia con que se encontraban en el tráfico jurídico, como es la cláusula compromisoria, sino que, sobre todo, puesta frente al grave problema, ya aludido, de la eficacia positiva que habría de darse al pacto de compromiso, se decide rotundamente por una posibilidad de ejecución específica, mediante la institución de lo que llama formalización judicial del compromiso, que, como su nombre indica consiste en la intervención del Juez para obligar a la parte que se niegue, expresa o tácitamente, a cumplir con su convenio primitivo, a estar y pasar por el mismo o, en su defecto, por las declaraciones que el Juez emita en su lugar. Nada de esto se encuentra en el derecho que esta Ley deroga, donde ciertos atisbos de la intervención judicial en algún acto de jurisdicción voluntaria son insuficientes para las necesidades actuales, según ha tenido que reconocer recientemente la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo. Clave, por lo tanto, de esta eficacia buscada del arbitraje es la mencionada formalización judicial del compromiso, que dará nueva y utilísima vitalidad a una figura que entre nosotros parece prosperar en principio,

pero que, en realidad, a la hora de las realizaciones que cuentan, sólo apunta en su haber escasos y lánguidos triunfos.

Sobre la base de las dos directrices señaladas, de la sencillez y de la eficacia, el examen del articulado concreto de la Ley no ofrece especiales dificultades.

Los artículos primero a tercero de la Ley se proponen la delimitación del ámbito del mismo con relación a otras instituciones, afines al arbitraje común, pero que, en cierto modo, revisten una distinta naturaleza. Se dejan fuera de su imperio todos los arbitrajes que no sean de derecho privado, lo cual no quiere decir que no les dé valor ni incluso que, con respecto a ellos no sea aconsejable una adecuada reforma, sino simplemente que ha parecido más oportuno no confundir este tipo de arbitrajes de distinto significado y estructura, con el arbitraje puro entre particulares regulado por textos de derecho privado estricto. Igualmente se delimita la figura, del arbitraje, distinguiendo al ámbito del arbitrador y el arbitraje formal del informal o impropio, al que sólo se le reconoce eficacia cuando su resultado haya sido aceptado por las partes.

La fusión de los dos tipos de arbitraje, es decir, del arbitraje estricto y de la amigable composición, se declara en el artículo cuarto conservando sólo la distinción entre arbitraje de derecho y arbitraje de equidad (que da origen luego, sin embargo, a importantes diferencias de régimen jurídico) como una variante opcional de un tipo unitario.

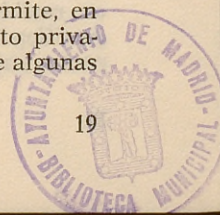
La naturaleza contractual del arbitraje, previendo expresamente, dentro de ciertos límites, el caso del arbitraje instituido por testamento, se contiene en el artículo 5.º

Los artículos sexto a undécimo regulan, con carácter de rigurosa novedad en el derecho positivo, la figura de la llamada cláusula compromisoria, la cual, si bien tiene vida e importancia en la práctica, carecía hasta ahora de un cuerpo de disposiciones legales en que se pudiera refugiar el intérprete necesitado de encontrar soluciones concretas a su respecto. El contrato preliminar de arbitraje, sea o no una auténtica cláusula contractual, queda legalmente reconocido en el artículo sexto, como figura distinta y más sencilla que el compromiso y, por lo tanto, con requisitos menos rigurosos para su estipulación (artículos séptimo y octavo). Pero sobre todo, la tras-

cendencia de la Ley en este sentido es el establecimiento, en los artículos noveno, décimo y undécimo, especialmente en el artículo décimo, del otorgamiento a este contrato preliminar de una eficacia positiva y específica, que consiste en poder obtener del Juez las consecuencias del contrato, aunque alguna de las partes se niegue a formalizarlo. Se ha ordenado, pues, una intervención judicial, con vistas a lo que se llama formalización judicial del compromiso, la cual, caso de prosperar, obviará definitivamente el obstáculo que hoy supone, para la eficacia de estas cláusulas, la consideración de que, por tratarse de declaraciones de voluntad, esto es, de un hacer infungible, el Juez no puede ejecutarlas específicamente en caso de incumplimiento del obligado. La intervención judicial se ha reducido, no obstante, a sus mínimas dimensiones, pues sólo consiste en una petición de parte, con posible oposición de la contraria, y una resolución judicial por medio de auto, que no es directamente recurrible, aunque quepa discutirlo más tarde, en las hipótesis que la propia Ley establece. El criterio de la Ley aparece, pues, aquí radicalmente inspirado en el seguimiento y armonización de aquellos dos principios de sencillez y eficacia de que antes se habló.

En el resto del articulado aparecen regulados los tres elementos esenciales que integran la institución del arbitraje: el compromiso, la dación y recepción del árbitro y el procedimiento arbitral.

Al compromiso se refieren los artículos 12 al 19. El artículo 12 define el contrato de compromiso de acuerdo con la concepción que se acepta del mismo. El artículo 13 regula la capacidad para comprometer, aclarando especialmente el problema del vicio del consentimiento acerca de documentos fundamentales. El artículo 14 determina el posible objeto de un compromiso, resolviendo expresamente la cuestión tantas veces discutida hoy en la práctica, del conflicto entre el principio de sumisión y el principio de conexión, cuando la materia sometida al árbitro es conexa a otra de que deben conocer los Jueces o Tribunales ordinarios. El artículo 15 se ocupa de la causa del compromiso, fijándola en la necesaria existencia de una controversia «inter partes» y sacando de aquí consecuencia análogas a las que hoy establece nuestro derecho positivo. Los artículos 16 y 17 detallan la forma de compromiso, suavizando las reglas del derecho vigente en este punto, pues permite, en casos de compromiso extendido en documento privado, acudir a la formalización oficial, y suprime algunas



de las circunstancias de la escritura de compromiso que hoy, arcaicamente, se mantienen en la Ley de Enjuiciamiento Civil, aclarando el problema de las costas. Finalmente, los artículos 18 y 19 fijan los efectos del compromiso, tanto los efectos genéricos, que obligan a las partes a estar y pasar por lo estipulado, como los efectos específicos del apartamiento de la jurisdicción ordinaria, apartamiento que se configura como una excepción de parte con posible carácter dilatorio en los procesos que todavía admiten defensas de esta clase.

A la dación y recepción de árbitros se refieren los artículos 20 a 26 de la Ley. En general, se conservan aquí las disposiciones del derecho vigente, sin más que simplificar complicaciones no justificadas de las normas hasta ahora en vigor. Se sigue entendiendo, en efecto, que los árbitros han de ser Letrados, añadiéndose que ejerzan la profesión, para evitar intrusiones de competencia excepto, naturalmente, en el caso del arbitraje de pura equidad (art. 20). Se establece el número de árbitros y su designación, común y personalísima, a cargo de las partes, sin que la solución, a veces hoy propugnada, de atenuar este rigor de la Ley se haya aceptado para arbitrajes como los que regulan, de puro carácter particular, sin perjuicio de que se pueda seguir otro criterio cuando se organicen arbitrajes corporativos o sindicales en los que quepa establecer un criterio para el nombramiento de árbitros menos inflexibles (arts. 21 y 22). Se somete a un principio general la eventualidad de la recusación de los árbitros (art. 23). Y se regula, por último, la aceptación del arbitraje, indicando su forma y sus efectos, si bien se suprime, en este punto, el ilógico o inútil antejuicio que establecía aquí la Ley de Enjuiciamiento Civil (arts. 24 y 25).

Al procedimiento arbitral se refieren los artículos 26 a 30. El procedimiento tiene, en sí, carácter de orden público según establece, llenando una laguna en este punto de derecho positivo, el artículo 26. La regulación del procedimiento, en caso de arbitraje de derecho, se verifica, como es lógico, con mayor extensión, si bien manteniendo, en líneas generales, el desarrollo que hoy ofrece según la legislación que se deroga. La única novedad de importancia que aquí se adopta es la de suprimir la intervención dirimente del Juez de Primera Instancia, en caso de discordia, por entender que este remedio extremo contradice, en realidad, todo el sentido del arbitraje y no está justificado ni por lo que respecta a la voluntad de las partes ni por la actuación imperativa del Poder

público en una auténtica manifestación procesal (art. 27). Existe, además, en este punto la significativa reforma, que consiste en suprimir el recurso de apelación con relación al laudo arbitral en un arbitraje de derecho, pues el arbitraje de derecho se configura por la Ley como una institución única, desligada de las instancias ordinarias judiciales, lo que, para el caso de un arbitraje contraído con relación a un litigio pendiente en segunda instancia, resuelve la difícil situación que hoy plantea en este punto nuestro derecho positivo. Sólo se admite, pues, contra el laudo, en este caso, el recurso de casación por los motivos ordinarios y, lógicamente, por el procedimiento común, ante la Sala Primera del Tribunal Supremo (art. 28).

En el supuesto de arbitraje de equidad, el procedimiento se simplifica y se limita a la garantía del principio de contradicción y a exigir para la emisión del laudo un mínimo formal. Ningún recurso ordinario cabe, evidentemente, contra el laudo con más razón en este caso, pero sin la invocación del Tribunal Supremo que hoy, inexactamente, llama nuestra Ley de Enjuiciamiento Civil recurso de casación, cuando es realmente un recurso de nulidad, el cual se mantiene por la Ley con el mismo régimen jurídico que en la actualidad tiene (art. 30).

Finalmente, en el artículo 31 se declara la ejecutabilidad del laudo arbitral, equiparado en este punto a una sentencia, con posibilidad de ejecución provisional cuando está pendiente de recurso, previa caución a cargo del interesado (art. 31).

En su virtud, y de conformidad con la propuesta elaborado por las Cortes Españolas, dispongo:

Artículo 1.º—La presente Ley regula los arbitrajes de Derecho Privado en sustitución de las normas que a los mismos dedican el Código Civil (arts. 1.820 y 1.821), el Código de Comercio (arts. 50 y 638), la Ley de Enjuiciamiento Civil (arts. 487 y 790 al 839) y disposiciones de igual naturaleza, tanto sobre arbitraje como sobre amigable composición.

Los arbitrajes ordenados en prescripciones de Derecho Público, sean internacionales, corporativos, sindicales o de cualquier otra índole, continuarán sometidos a las disposiciones porque se rigen.

Artículo 2.º—A los efectos de la presente Ley, se entiende por arbitraje la institución por la que una o más personas dan solución a un conflicto planteado

por otras que se comprometen previamente a aceptar su decisión.

No se considerará arbitraje la intervención del tercero que no se haga para resolver un conflicto pendiente, sino para completar o integrar una relación jurídica aún no definitiva totalmente.

En este caso, los efectos jurídicos de la intervención del tercero, continuarán sometidos al régimen particular que hoy en cada supuesto, se establece.

Artículo 3.º—El arbitraje, para ser eficaz, necesitará ajustarse a las prescripciones de esta Ley.

Ello no obstante, cuando, en cualquier otra forma, dos o más personas hubieren pactado la intervención dirimente de un tercero y hubieren aceptado expresa o tácitamente su decisión después de emitida, el acuerdo será válido y obligatorio para las partes si en él concurren los requisitos generales para la eficacia de un convenio.

Artículo 4.º—En lo sucesivo no existirá más que un tipo de arbitraje de Derecho Privado, ya deban fallar los árbitros con arreglo a derecho, ya solamente con sujeción a su saber y entender.

En la escritura de compromiso las partes podrán optar por una u otra de estas soluciones, del modo que se establece en esta Ley; pero la opción producirá sólo las diferencias especiales que en ella se admiten expresamente.

Se entenderá que las partes optan por un arbitraje de derecho cuando nada dijeran en contrario.

Artículo 5.º—El arbitraje se establecerá siempre por contrato y en forma de escritura pública, salvo que se instituya por disposición testamentaria para solucionar extrajudicialmente las diferencias que puedan surgir entre herederos no forzosos por cuestiones relativas a la distribución de la herencia.

Artículo 6.º—Las partes podrán preparar el arbitraje comprometiéndose previamente, bien en un pacto principal, bien en una estipulación accesorio, a instituirlo en su día.

Artículo 7.º—El contrato preliminar de arbitraje no estará sujeto a los requisitos de capacidad, objeto y forma que para el compromiso se establecen especialmente por la Ley, sino a los generales que acerca de estas materias, rigen en el Derecho Privado de la contratación.

Artículo 8.º—El contrato preliminar de arbitraje no necesitará contener ni la designación de los terceros que hayan de figurar como árbitros ni la del tema controvertido que se someterá a su decisión.

Sin embargo, será preciso, en todo caso, una fijación por lo menos de principio, de la relación jurídica singular a que ha de referirse el arbitraje, sin que sea válida la renuncia general a la acción judicial en relación con todos los derechos de una persona.

En el caso de que el contrato preliminar de arbitraje contenga alguna indicación sobre designación de los árbitros y determinación de la controversia, tal indicación habrá de acomodarse a las normas establecidas para el compromiso por esta Ley.

Artículo 9.º—Los otorgantes de un contrato preliminar de arbitraje quedarán obligados a la realización de cuantos actos sean necesarios para que el arbitraje pueda tener efecto y, en particular, a la designación de los árbitros y a la determinación del tema controvertido.

Caso de que alguna de las partes se negare a verificarlo o lo hiciere de modo que resultara inaceptable la otra parte podrá dirigirse al Juez pidiendo la formalización judicial del compromiso.

Artículo 10.—La formalización judicial del compromiso se llevará a cabo del siguiente modo:

1.º Será Juez competente para intervenir en ella el de Primera Instancia del lugar donde el compromiso hubiere de ser contraído, y en su defecto, el del domicilio de alguno de los que se nieguen a cumplirlo.

2.º La parte a quien interese la formalización del compromiso se dirigirá por escrito al Juez, valiéndose de Procurador y Letrado, justificando notarialmente la negativa del contrario o contrarios e indicando el nombre del árbitro o árbitros que proponga y los demás elementos que, según el artículo 19, debe o puede contener la escritura de compromiso.

3.º El Juez emplazará, en la forma ordinaria, a la persona o personas contra quienes se dirija la reclamación, dándoles un plazo de quince días para que comparezcan y se opan por escrito, si quieren, a la petición que se deduce, valiéndose igualmente de Procurador y Letrado.

4.º Evacuado el trámite anterior, el Juez resolverá por medio de auto si accede o no a la formalización.



Si entiende haber lugar a la formalización del compromiso, hará las declaraciones que sean necesarias; entre ellas, el nombramiento de los árbitros y la fijación de las cuestiones que se han de resolver.

5.º Contra la resolución del Juez no se dará recurso alguno, pero su criterio no prejuzgará definitivamente la validez del contrato preliminar.

Cuando el Juez no acceda a la formalización del compromiso, la petición podrá ser reproducida en juicio ordinario. Si accediese a ella, sólo podrá atacarse la validez del contrato preliminar mediante los recursos establecidos para la impugnación del laudo.

Las costas de la formalización judicial del compromiso serán a cargo de la parte cuya pretensión u oposición resulte desestimada, sin perjuicios de su recuperación ulterior, si a ella hubiere lugar.

Artículo 11.—Si el compromiso no se hubiere voluntariamente formalizado no se hubiere hecho uso del derecho que reconocen los artículos 9.º y 10, el contrato preliminar de arbitraje quedará sin efecto. Pero formalizado el contrato o pendiente de formalización judicial, el compromiso surtirá todos los efectos que le están atribuidos por esta Ley.

Artículo 12.—Mediante el contrato de compromiso dos o más personas estipulan que una cierta controversia específicamente determinada, existente entre ellos, esa resuelta por tercero o terceros, a los voluntariamente designan y a cuya decisión expresamente se someten.

Artículo 13.—La capacidad para comprometer será la que se exige para enajenar, teniendo en cuenta la naturaleza de los bienes a que afecte el compromiso.

La ignorancia o el error acerca de la falsedad de algún documento fundamental para el derecho de la parte invalidará el consentimiento, a no ser que por el compromiso alguna de ellas se haya apartado de un pleito comenzado.

Pero los documentos no tenidos en cuenta al tiempo de otorgar el compromiso y que aparezcan o se recobren después no lo anularán, salvo que ello se deba a la mala fe de alguno de los contratantes.

Artículo 14.—Podrán ser objeto de un compromiso todas aquellas materias de Derecho Privado sobre las que las partes puedan disponer válidamente.

En el caso de que una materia disponible aparezca indisolublemente unida a otra que no lo sea, no podrá comprometerse sobre ninguna de las dos.

Artículo 15.—La validez del compromiso exige la existencia de una controversia pendiente entre las partes.

Si la controversia no existe, bien por no haber nacido, bien por haber quedado extinguida mediante sentencia judicial u otro acto jurídico, el compromiso será nulo.

No se considerará extinguida la controversia cuando contra la sentencia que la dirime quepa aún proponer recurso ordinario o extraordinario, excepto el de revisión.

Artículo 16.—El compromiso habrá de formalizarse en escritura pública.

Si se hubiera extendido en documento privado, las partes podrán compeler recíprocamente a la formalización judicial de que trata el artículo 10 de la presente Ley.

Artículo 17.—La escritura pública de compromiso habrá de contener:

1.º Los nombres, profesión y domicilio de los que la otorguen.

2.º Los nombres, profesión y domicilio de los árbitros.

3.º La controversia que se somete al fallo arbitral, con expresión de sus circunstancias.

4.º El plazo o término en que los árbitros hayan de pronunciar laudo.

5.º El lugar en que habrá de desarrollarse el arbitraje.

Las partes podrán facultativamente estipular en el compromiso que los árbitros habrán de fallar, no con sujeción a derecho, sino con arreglo a su saber y entender y que habrán de pagarse las multas que se fijen en la escritura, como cláusula penal, por el incumplimiento del convenio, en sustitución o con independencia del derecho a pedir su ejecución.

También podrán las partes incluir en el compromiso el pacto de que los árbitros podrán condenar en costas a algunas de ellas.

Artículo 18.—El otorgamiento del compromiso obli-

ga a las partes a estar y pasar por lo estipulado, de acuerdo con las reglas generales de la contratación.

Artículo 19.—El otorgamiento del compromiso impedirá a los jueces y tribunales conocer de la controversia sometida al fallo arbitral, siempre que la parte a quien interese invoque el compromiso mediante la correspondiente excepción, que tendrá carácter previo en aquellos procedimientos que admitan defensas de esta clase.

Artículo 20.—El nombramiento de árbitros habrá de recaer en Letrados que ejerzan la profesión.

No obstante, si las partes estipulan que los árbitros puedan fallar, no con arreglo a derecho, sino a su saber y entender, podrán designar a quienes prefieran con tal de que sean personas naturales, que estén en el pleno ejercicio de sus derechos civiles y que sepan leer y escribir.

Artículo 21.—Los árbitros serán siempre en número de uno, tres o cinco.

Artículo 22.—Los árbitros habrán de ser designados, en todo caso, de común acuerdo.

No será válido el pacto de defirir a una de las partes, o a un tercero, la facultad de hacer el nombramiento de ninguno de ellos.

Artículo 23.—No podrán ser nombrados árbitros quienes tengan con las partes o con la controversia que se les somete, alguna de las relaciones que establecen la posibilidad de abstención y recusación de un Juez.

Esto no obstante, si las partes, conociendo dicha circunstancia, la dispensan expresamente, el laudo no podrá ser impugnado por tal motivo.

Artículo 24.—Otorgada la escritura, el Notario autorizante, u otro que dé fe del acto, la presentará a los árbitros para su aceptación.

De la aceptación o de la negativa, en su caso, se extenderá diligencia, que firmarán los árbitros y el Notario.

Artículo 25.—La aceptación de los árbitros dará derecho a que cumplan con su encargo, bajo la pena de responder de los daños y perjuicios.

Los árbitros tendrán derecho a exigir retribución de las partes en los casos establecidos por el Código Civil para el contrato de mandato (art. 1.711).

Artículo 26.—El procedimiento arbitral se ajustará a lo que se establece en los artículos siguientes y en ningún caso podrá ser modificado por convenio entre las partes.

Artículo 27.—Si los compromitentes han optado por un arbitraje de derecho, su tramitación se verificará de acuerdo con las siguientes normas:

1.º Los árbitros señalarán a las partes un plazo que no podrá exceder de la cuarta parte del fijado en la escritura para formular por escrito sus pretensiones, presentar los documentos en que las apoyen y proponer, también por escrito, cualquier otro medio de prueba, acompañando tantas copias cuantas sean las partes interesadas.

2.º Las copias de los escritos presentados por cada una de las partes se comunicarán a las otras, concediéndoles un nuevo plazo, que no podrá exceder de la cuarta parte del total fijado en la escritura para contestar por escrito a las alegaciones adversarias y presentar los documentos y proponer las pruebas que sean necesarias en vista de aquéllas.

3.º A continuación, los árbitros recibirán el procedimiento a prueba, si estimaren que es precisa para demostrar hechos de directa y conocida influencia en la resolución del conflicto planteado.

El plazo de prueba no podrá exceder de la cuarta parte del total señalado en la escritura.

4.º Podrán practicarse en el arbitraje cualquier clase de pruebas, incluso por iniciativa de los árbitros, sujetándose en cuanto a su celebración, a las normas generales de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Para las pruebas que los árbitros no puedan practicar por sí mismos, impetrarán el auxilio del Juez de Primera Instancia del lugar donde se desarrolle el arbitraje, quien adoptará a este efecto las medidas que estime oportunas.

5.º Practicadas las pruebas, los árbitros, oirán personalmente a las partes o a los Letrados que las defiendan.

6.º Finalmente, los árbitros dictarán su laudo ante Notario con arreglo a derecho, sobre cada uno de los puntos sometidos a su decisión, dentro del tiempo que reste por correr del señalado en el compromiso.

La decisión se tomará por mayoría de votos. Si



no resultare mayoría a favor de ninguna decisión, se entenderá que queda sin efecto el compromiso.

Artículo 28.—Contra el fallo que dicten los árbitros en un arbitraje de derecho, procederá sólo el recurso de casación, por infracción de ley o quebrantamiento de forma ante la Sala Primera del Tribunal Supremo.

Artículo 29.—El procedimiento, en caso de equidad, no tendrá que someterse a formas legales ni que ajustarse a derecho de cuanto al fondo.

Los árbitros deberán, no obstante, dar a las partes oportunidad adecuada de ser oídas y de presentar las pruebas que estimen necesarias, dirimiendo después el conflicto según su saber y entender.

El laudo habrá de dictarse por escrito ante Notario y por mayoría de votos.

Artículo 30.—Contra el fallo que dicten los árbitros en un arbitraje de equidad, sólo cabrá recurso de nulidad ante la Sala Primera del Tribunal Supremo, por los motivos y según el procedimiento que se establece en el artículo 1.691, número 3.º, y en los artículos 1.774 a 1.780 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Artículo 31.—Firme el laudo arbitral, podrá obtenerse la ejecución del acuerdo, en su caso, ante el Juez de Primera Instancia del lugar donde se ha seguido el arbitraje.

Esta ejecución se llevará a efecto del modo que la Ley procesal establece para la de sentencias (artículos 919 al 958).

Podrán también concederse, a instancia de parte, ejecución provisional del laudo pendiente de casación o de nulidad, si el que la pidiera da fianza bastante, a juicio del Juez, para responder de las costas y de los perjuicios que se pudieran ocasionar.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

1.º Las cláusulas compromisorias válidamente estipuladas en la fecha de la promulgación de esta Ley se regirán, en cuanto a su eficacia, por las disposiciones que en el nuevo texto se contienen.

2.º Los arbitrajes o amigables composiciones otorgadas ya formalmente, mediante la firma de la correspondiente escritura pública, estén o no en vías

de tramitación, se someterán al régimen jurídico de las disposiciones de la legislación anterior que la presente deroga.

Esta prescripción comprende igualmente a los recursos que, según la legislación que se deroga, cabe proponer contra el laudo de los árbitros o amigables compondores.

DISPOSICION DEROGATORIA

Quedan derogadas cuantas disposiciones regulen los arbitrajes privados y sustituido íntegramente su texto por las prescripciones de la nueva Ley.

de transmisión se someterán al régimen jurídico de las disposiciones de la legislación anterior que la pre-

esta disposición comprende únicamente a los re-

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Quedan derogadas todas las disposiciones que en los

ordenamientos anteriores se refirieran a la materia

regulada en esta Ley.

En consecuencia, quedan derogadas las disposiciones

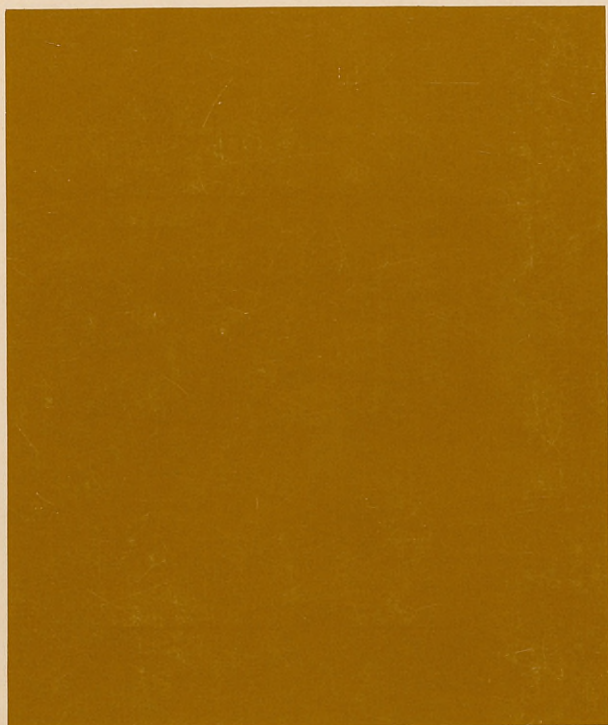
que se refirieran a la materia regulada en esta Ley.

En consecuencia, quedan derogadas las disposiciones

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

En consecuencia, quedan derogadas las disposiciones

que se refirieran a la materia regulada en esta Ley.



**Cámara de Comercio
e Industria de Madrid**

Ayuntamiento de Madrid

